

ASUNTO: RECURSO ESPECIAL EN MATERIA DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Nº A/SUM-008521/2019, CONVOCADO PARA LA ADQUISICIÓN DE APARATAJE DE FISIOTERAPIA CON DESTINO A LOS CENTROS SANITARIOS DE ATENCIÓN PRIMARIA DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD. LOTE 8

En Móstoles, a 22 de julio de 2019

**AL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DE LA
COMUNIDAD DE MADRID**

D. Antonio Mendes Castro, con NIF Nº 50714904L, actuando en nombre y representación de la empresa **PRIM,S.A.**, con CIF A28165587 y con domicilio social en Móstoles (Madrid), en la calle Yolanda González 15, cuya representación acredito mediante copia legitimada ante Notario de mi escritura de poder (se adjunta como **Documento Nº 1**), conforme proceda en derecho y de conformidad con lo previsto en el **artículo 44 y siguientes** de la **Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público**, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo **2014/23/UE y 2014/24/UE**, de 26 de febrero de 2014, interpone mediante el presente escrito,

**RECURSO ESPECIAL
EN MATERIA DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA**

Contra la Resolución de Adjudicación del **Expediente Nº A/SUM-008521/2019, convocado para la adquisición de aparataje de fisioterapia con destino a los Centros Sanitarios de Atención Primaria del Servicio Madrileño de Salud**, por la que se adjudica el **lote 8** a la casa comercial **BOLD TECHNOLOGIES LEADING ESPAÑA, S.L**

Se adjunta como **Documento Nº 2** copia de la Resolución de Adjudicación objeto del presente recurso.

El presente recurso se fundamenta en los siguientes,

HECHOS

PRIMERO. – Que, la empresa **PRIM, S.A** presentó su proposición en el procedimiento con **Expediente Nº A/SUM-008521/2019, convocado para la adquisición de aparataje de fisioterapia con destino a los Centros Sanitarios de Atención Primaria del Servicio Madrileño de Salud.**

Que, por este motivo, la empresa a la que represento tiene la consideración de parte interesada en el procedimiento de referencia.

SEGUNDO. – Que, con fecha 12 de julio de los corrientes, se publicó en el Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid Resolución en la que se informaba de la adjudicación del referido expediente a **BOLD TECHNOLOGIES LEADING ESPAÑA, S.L**

A la vista de las serias irregularidades jurídicas de que adolece la Resolución aludida y en la medida en que dichas irregularidades constituyen una infracción de los principios esenciales que deben regir la contratación del sector público, se interpone mediante este escrito, en tiempo y forma, este **RECURSO ESPECIAL** contra dicho acto, por considerarlo contrario a Derecho y gravemente perjudicial para sus intereses, lo que hace al amparo del **artículo 44** de la **Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014** y sobre la base de los siguientes Requisitos y Fundamentos Jurídicos,

I REQUISITOS

PRIMERO. – REQUISITOS SUBJETIVOS

1.1 Órgano competente

Como quiera que el presente Recurso Especial se dirige contra una Resolución de Adjudicación de un contrato sujeto a regulación armonizada convocado por el **SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD**, la competencia para conocer el mismo corresponde al **Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid**.

1.2 Legitimación

De acuerdo con el **artículo 48 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público**, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014:

“Podrá interponer el recurso especial en materia de contratación cualquier persona física o jurídica cuyos derechos o intereses legítimos, individuales o colectivos, se hayan visto perjudicados o puedan resultar afectados, de manera directa o indirecta, por las decisiones objeto del recurso”.

La compañía **PRIM, S.A** está legitimada para la interposición del presente Recurso Especial por cuanto la Resolución de Adjudicación adoptada por el órgano de contratación resulta gravemente perjudicial a los intereses legítimos de esta compañía.

SEGUNDO. – REQUISITOS OBJETIVOS

2.1 Acto impugnado

Como hemos adelantado, el acto objeto de Recurso Especial lo constituye la Resolución de Adjudicación del Expediente de referencia a la empresa **BOLD TECHNOLOGIES LEADING ESPAÑA, S.L**

2.2 Recurribilidad del acto

Estamos así ante un acto que cumple los requisitos establecidos en la **Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público** para ser calificado como recurrible a través del Recurso especial, a saber:

1. Acto objeto del recurso especial conforme al **artículo 44.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.**
2. Acto referido a contrato de suministro sujeto a regulación armonizada que pretende concertar un poder adjudicador, conforme a los **artículos 21 y 44.1 de la Ley**

9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, indicando este último que:

“1. Serán susceptibles de recurso especial en materia de contratación, los actos y decisiones relacionados en el apartado 2 de este mismo artículo, cuando se refieran a los siguientes contratos que pretendan concertar las Administraciones Públicas o las restantes entidades que ostenten la condición de poderes adjudicadores:

a) Contratos de obras cuyo valor estimado sea superior a tres millones de euros, y de suministro y servicios, que tenga un valor estimado superior a cien mil euros.”

Resulta fuera de toda duda que estamos ante un contrato de suministro sujeto a regulación armonizada, al ser su valor estimado superior a los importes que el **artículo 21.1.b) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público** fija como umbral de los contratos de suministro sujetos a una regulación armonizada.

En este sentido, conviene recordar que:

- De conformidad con el **artículo 101.2 y 12 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público** (Cálculo del valor estimado de los contratos),

“En el cálculo del importe total estimado deberán tenerse en cuenta las eventuales prórrogas del contrato”, y, en particular, tratándose de la adjudicación simultánea por lotes separados de contratos de suministro homogéneos, ***“se deberá tener en cuenta el valor global estimado de la totalidad de dichos lotes”.***

- Adicionalmente, para este último supuesto, el **artículo 21.2** de la **Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público** establece la siguiente regla que obliga, expresamente, a aplicar a la adjudicación de cada lote las normas de la regulación armonizada (entre ellas, la procedencia del recurso especial):

“En el supuesto previsto en el artículo 101.12 relativo al cálculo del valor estimado en los contratos que se adjudiquen por lotes separados, cuando el valor acumulado de los lotes en que se divida el suministro iguale o supere las cantidades indicadas en el apartado anterior, se aplicarán las normas de la regulación armonizada a la adjudicación de cada lote”.

TERCERO. – REQUISITOS FORMALES

3.1 Plazo

Tratándose de actos recurribles conforme a lo señalado en el apartado anterior y siendo de aplicación la tramitación del Recurso Especial prevista en la **Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público**, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, el plazo para la interposición del mismo, conforme al **artículo 50**, es de 15 días hábiles, los cuales se contarán, a partir del día siguiente a aquel en que se ha tenido conocimiento de la posible infracción.

En su virtud, el presente Recurso Especial se presenta dentro del plazo legal de 15 días hábiles establecido por el **artículo 50** de la **Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público**, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

A estos hechos le son de aplicación los siguientes,

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. – INCUMPLIMIENTO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS POR PARTE DEL PRODUCTO OFERTADO POR LA CASA COMERCIAL BOLD TECHNOLOGIES LEADING ESPAÑA, S.L PARA EL LOTE 8

Como señalado en el encabezado del presente Fundamento de Derecho Primero, el motivo que viene en justificar la interposición del presente Recurso Especial, que viene en motivarlo y que ha de resultar indefectiblemente en la exclusión de la adjudicataria es que, como vendremos en detallar, estamos ante un evidente incumplimiento de las prescripciones técnicas reflejadas como de obligado cumplimiento en los pliegos rectores del procedimiento.

No podría continuar esta representación el presente Fundamento Derecho Primero sin reproducir un extracto relativo a las prescripciones técnicas de obligado cumplimiento para el referido **lote 8** y más concretamente en cuanto a las *características técnicas* del mismo, ya que, siendo una exigencia técnica mínima que los productos ofertados dispongan de '**una frecuencia de trabajo regulable de 26 a 400Hz**', el producto de **BOLD TECHNOLOGIES LEADING ESPAÑA, S.L.** no lo cumple, extremo que se verifica con la información contenida en su ficha técnica y que a continuación se extracta.

A saber: Información requerida en el pliego técnico:

ANEXO I ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS ARTÍCULOS:			
Lote	Código	Descripción del lote	Características técnicas
8	3000944	ONDA CORTA INDUCTIVA	<ul style="list-style-type: none">- Onda corta pulsátil- Display digital LCD- Frecuencia: 27,12 MHz (± 0.6%)- Canales: 2- Con dos brazos articulados independientes incluidos- Potencia de pulso: 0-200 W (± 20%) en 50 ohm.- Potencia media: 0-64 W (± 20%) en 50 ohm- Potencia de pico ajustable (200 Watt)- Anchura de pulso y frecuencia ajustables- Duración de impulso de 65 a 400 microsegundos.- Frecuencia regulable de 26 a 400 Hz.- Indicador de potencia- Brazos de electrodo ajustables- El año de fabricación del equipo no puede ser superior a 2 años anteriores a la fecha de adjudicación

Información reflejada en la ficha técnica:

Extracto de Ficha técnica de **BOLD TECHNOLOGIES LEADING ESPAÑA, S.L.** para el **Lote 8**



 Productos ▾ Sobre nosotros Noticias Eventos Testimonios Contacto		
PARÁMETROS TÉCNICOS		
Modelo	BTL-6000 shortwave 400	BTL-6000 shortwave 200
Interfaz de usuario	pantalla táctil a color de 5.7"	pantalla táctil a color de 5.7"
Inductivo/Capacitivo	1 o 2 canales inductivos / 1 canal capacitivo	1 o 2 canales inductivos
Potencia	400 W pulsátil, 200 W continuo	200 W pulsátil, 100 W continuo
Protocolos predefinidos	enciclopedia BTL, 62 indicaciones	
Programas del usuario	100 programas definidos por el usuario	
Frecuencia de pulso	50-1500 Hz	

Se aporta link de la fuente pública de consulta que corrobora lo anterior:

<https://www.btl.net.es/productos-fisioterapia-terapia-onda-corta-btl-6000-onda-corta-400>

Pues bien, además fruto del acceso al expediente, y más concretamente de la documentación técnica presentada por la adjudicataria en su oferta, esta representación ha podido comprobar que la solución ofertada por la casa comercial **BOLD TECHNOLOGIES LEADING ESPAÑA, S.L.**, no cumple con la referida exigencia técnica, lo que en aplicación de las exigencias obrantes en los pliegos rectores del expediente de referencia y la normativa de aplicación, y más concretamente del principio de igualdad de trato, no puede sino determinar la exclusión de la oferta presentada por la adjudicataria respecto del expediente.

Así, en la oferta presentada por **BOLD TECHNOLOGIES LEADING ESPAÑA, S.L.** consta en la página 12 de la misma, bajo el epígrafe “*Parámetros básicos del generador de Onda Corta:*” la siguiente información:

OFERTA TÉCNICA	
Expte. A/SUM-006521/2019 LOTES 1, 2 Y 3	
Parámetros básicos del generador de Onda Corta:	
	BTL 6000 Onda Corta 400 (Inductiva con 2 brazos)
Voltios de salida (ver nota 1)	200 W en 50
Frecuencia de trabajo	27,12 MHz
Valores ajustables	
Tiempo de terapia	1 a 30 minutos
Modalidad	Continuo o Pulsado
Modo pulsado: duración pulsado	50 us a 2000 us
Modo pulsado: frecuencia	50 Hz a 1500 Hz
Tipo de aplicador	Capacitivo Inductivo 140 mm Inductivo 80 mm
Salida	A: Inductivo B: Inductivo A+B: Inductivo C: Capacitivo
Corriente de salida (ver nota 2)	10 a 200 W en Modo Continuo 10 a 400 W en Modo Pulsado

Nota 1: La corriente establecida se mide basada en la carga de impedancia nominal de 50 Ω , según se describe en los Estándares EN 60601-2-3:1993. Los aplicadores capacitivos deben colocarse inmediatamente en las placas metálica sensora de la carga. Los aplicadores inductivos deben ser colocados a dos centímetros de distancia de la bobina de la carga del circuito resonante.

Nota 2: El valor máximo de la salida de energía puede limitarse de acuerdo al aplicador conectado.

En consecuencia, resulta evidente y palmario que tales datos, no cumplen con el propósito y exigencia descritos en los pliegos del concurso.

En contraposición, el producto ofertado por **PRIM, S.A** cumple escrupulosamente con las características detalladas en los pliegos.

En virtud de todo lo anteriormente expuesto, no cabe sino concluir que en lo que refiere a la oferta técnica y en referencia a la exigencia técnica de obligado cumplimiento '*Frecuencia de trabajo regulable de 26 a 400Hz*', el producto ofertado por **BOLD TECHNOLOGIES LEADING ESPAÑA, S.L**, **NO** cumple con lo exigido en Pliegos, habiéndose ello apreciado en la documentación técnica presentada.

En consecuencia, habida cuenta del incumplimiento del Pliego señalado, la consecuencia necesaria de su apreciación por parte del Tribunal al que humildemente nos dirigimos, ha de ser la exclusión de la oferta presentada por **BOLD TECHNOLOGIES LEADING ESPAÑA, S.L** así como la retroacción de las actuaciones y la adjudicación del expediente a **PRIM,S.A** por haber presentado la actual adjudataria una oferta irregular a la luz de los

requerimientos y exigencias contenidos en los Pliegos y la normativa de aplicación.

SEGUNDO. – LOS PLIEGOS SON LEY ENTRE LAS PARTES.

Con relación a la situación planteada, debe tomarse en consideración que de conformidad con lo previsto en el **artículo 124** de la **Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público**, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las **Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE de 26 de febrero de 2014**, lo previsto en un Pliego de Prescripciones Técnicas, marca los requisitos mínimos que deben cumplir las ofertas de los licitadores para poder optar a convertirse en adjudicatarios del contrato.

“1. El órgano de contratación aprobará con anterioridad a la autorización del gasto o conjuntamente con ella, y siempre antes de la licitación del contrato, o de no existir esta, antes de su adjudicación, los pliegos y documentos que contengan las prescripciones técnicas particulares que hayan de regir la realización de la prestación y definan sus calidades, sus condiciones sociales y ambientales, de conformidad con los requisitos que para cada contrato establece la presente Ley, y solo podrán ser modificados con posterioridad por error material, de hecho o aritmético. En otro caso, la modificación del pliego conllevará la retroacción de actuaciones.”

Apréciase que la determinación de las características técnicas correspondientes a los productos objeto de suministro corresponde al órgano de contratación y **no cabe modificarlas durante el proceso de licitación, pues una valoración que no se ajusta a los requisitos que constan en los pliegos es discriminatoria y atenta contra el principio de igualdad de trato al no tratar por igual a los licitadores que presentaron oferta.**

La naturaleza jurídica de los pliegos de condiciones o términos de referencia que elabora la Administración Pública para la contratación de sus obras, bienes o servicios, está claramente definida en tanto que son el reglamento que disciplina el procedimiento licitatorio de selección del contratista y delimita el contenido y alcances del contrato, estableciendo una preceptiva jurídica de obligatorio cumplimiento para la Administración y el contratista particular, no sólo en la etapa de

formación de la voluntad sino también en la de cumplimiento del contrato y hasta su fase final.

De ahí el acierto de que se tengan como “*lex contractus*”.

De esta forma, lo previsto en los Pliegos marca los pactos y condiciones que el órgano de contratación debe seguir para la valoración de las ofertas presentadas a la licitación. En el presente caso, el **órgano de contratación NO ha tenido en cuenta las exigencias por él mismo establecidas** a la hora de valorar las soluciones ofertadas, contraviniendo con sus propios actos aquellas exigencias plasmadas en los Pliegos.

TERCERO. – VULNERACIÓN DE LOS PRINCIPIOS INFORMADORES QUE DEBEN REGIR TODO PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE LOS CONTRATISTAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.

La adjudicación del presente expediente a la oferta presentada por la empresa **BOLD TECHNOLOGIES LEADING ESPAÑA, S.L.**, en los términos expuestos y como ya se ha enunciado, vulnera los principios más elementales de la contratación pública y especialmente el **principio de igualdad de trato y no discriminación** que debe regir todo procedimiento de selección de los contratistas de la Administración.

La Mesa de Contratación debe excluir de la licitación las ofertas de aquellas empresas que incumplen los requerimientos esenciales del Pliego en lo que respecta a las exigencias técnicas de exigido cumplimiento obrantes en el Pliego de Prescripciones técnicas. En otro caso está dando un trato discriminatorio a las empresas que han invertido para cumplir con las condiciones estipuladas en la convocatoria.

A este respecto, se invoca el contenido del **artículo 1** de la **Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público** y del **artículo 132** y se recuerda que no se da, en definitiva, un trato igualitario a todas las ofertas definidas y descritas, cuando las mismas no han dado cumplimiento a las exigencias de los pliegos por los que se rige la presente convocatoria:

Artículo 1. Objeto y finalidad.

*“1. La presente Ley tiene por objeto regular la contratación del sector público, a fin de garantizar que la misma se ajusta a los principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos, y **no discriminación e igualdad de trato entre los licitadores**; y de asegurar, en conexión con el objetivo de estabilidad presupuestaria y control del gasto, y el principio de integridad, una eficiente utilización de los fondos destinados a la realización de obras, la adquisición de bienes y la contratación de servicios mediante la exigencia de la definición previa de las necesidades a satisfacer, la salvaguarda de la libre competencia y la selección de la oferta económicamente más ventajosa.(...).*

Artículo 132. Principios de igualdad, transparencia y libre competencia.

*“1. Los órganos de contratación darán a los licitadores y candidatos un **tratamiento igualitario y no discriminatorio** y ajustarán su actuación a los principios de transparencia y proporcionalidad.(...).*

Así, el **Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales**, en su **Resolución 081/2011**, de 23 de marzo de 2011, ha destacado la transcendencia de la protección del principio de igualdad de trato de los licitadores:

“(...) La Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público... señala que (...) deberán permitir el acceso en condiciones de igualdad de los licitadores, sin que puedan tener por efecto la creación de obstáculos injustificados a la competencia. Ello resulta perfectamente acorde, como no podía ser de otra forma, con el objeto mismo de dicha Ley recogido en su artículo 1, y que no es otro que “regular la contratación del sector público a fin de garantizar que la misma se ajusta a los principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos y no discriminación e igualdad de trato entre los candidatos (...).”

Por su parte, el **Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón**, mediante **Acuerdo 1/2011**, de 28 de marzo de 2011, resalta la importancia del principio de igualdad, como fundamento de todo el ordenamiento jurídico – español y comunitario – vigente en materia de contratación pública:

“(...) El principio de igualdad de trato implica, concretamente, que todos los licitadores potenciales deben conocer las reglas del juego y éstas se

deben aplicar a todos de la misma manera. De la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, se desprende que el respeto del principio de igualdad de trato implica no sólo la fijación de condiciones no discriminatorias para acceder a una actividad económica, sino también que las autoridades públicas adopten las medidas necesarias para garantizar el ejercicio de dicha actividad.

*Principio de igualdad de trato que es la piedra angular sobre la que se hacen descansar las Directivas relativas a los procedimientos de adjudicación de contratos públicos, tal y como ponen de relieve las Sentencias TJCE de 12 de diciembre de 2002 *Universale-Bau* y otro, y de 19 de junio de 2003, *GAT*. (...)"*

No se da en definitiva un trato igualitario al no excluir a aquellas empresas que no han dado cumplimiento a las exigencias requeridas en los Pliegos rectores de la presente convocatoria, en lo que respecta a la configuración de la Oferta técnica.

Así, en el presente supuesto, como se viene poniendo de manifiesto, los **principios de igualdad de trato y no discriminación** han sido vulnerados desde el momento en que la oferta de **BOLD TECHNOLOGIES LEADING ESPAÑA, S.L** no ha sido excluida de la licitación, a pesar de haber presentado una oferta que incumple las prescripciones técnicas de exigido cumplimiento para el referido lote 8.

CUARTO. – CONCURRENCIA DE LAS CAUSAS DE NULIDAD DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN DE LOS PROVEEDORES DE LA ADMINISTRACIÓN.

Como se viene expresando en los Fundamentos anteriores, las circunstancias que hemos puesto de manifiesto deben ser suficientes para determinar la nulidad del acto objeto de la presente reclamación.

Dispone el **artículo 39** de la **Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público**, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo **2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014:**

“1. Son causas de nulidad de derecho administrativo las indicadas en el artículo 47 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas”.

Este precepto, se concreta según el **artículo 47** de la **Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas**:

“1. Los actos de las Administraciones Públicas son nulos de pleno derecho en los casos siguientes:

- a) Los que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional.*
- b) Los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio.*
- c) Los que tengan un contenido imposible.*
- d) Los que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia de ésta.*
- e) Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados.***
- f) Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición.*
- g) Cualquier otro que se establezca expresamente en una disposición con rango de Ley.*

2. También serán nulas de pleno derecho las disposiciones administrativas que vulneren la Constitución, las leyes u otras disposiciones administrativas de rango superior, las que regulen materias reservadas a la Ley, y las que establezcan la retroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales”.

En virtud de cuanto se ha expuesto, al Tribunal,

SOLICITO

1.- Que tenga por presentado este escrito que constituye Recurso Especial en Materia de Contratación Administrativa, contra la Resolución de Adjudicación del **Expediente Nº A/SUM-008521/2019, convocado para la adquisición de aparataje de fisioterapia con destino a los Centros Sanitarios de Atención Primaria del Servicio Madrileño de Salud, lote 8**, por la que se adjudica el expediente de referencia a la casa comercial **BOLD TECHNOLOGIES LEADING ESPAÑA, S.L**

2.- Que se proceda a la retroacción de las actuaciones al momento anterior a la valoración de las ofertas y, conforme a lo acreditado en el presente recurso, se proceda a la exclusión de la oferta presentada por **BOLD TECHNOLOGIES LEADING ESPAÑA, S.L.** al incumplir las exigencias relativas al cumplimiento de prescripciones técnicas y en respeto a los principios rectores en materia de contratación.

PRIMER OTROSÍ DIGO: SOLICITUD DE PARALIZACIÓN INMEDIATA DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN

Se adopte la medida cautelar consistente en la suspensión del acto administrativo que origina el presente recurso con base en las siguientes,

ALEGACIONES

ÚNICA. - Concurrencia de los requisitos legales necesarios para otorgar la suspensión.

El órgano a quien corresponda la resolución del recurso debe, previa ponderación suficientemente razonada entre el perjuicio que causaría al interés público o a terceros la suspensión y el perjuicio que al recurrente o recurrentes se le causa como consecuencia de la ejecutividad inmediata del acto, acordar la suspensión del acto si la ejecución pudiera ocasionar perjuicios de imposible o difícil reparación o que la impugnación se fundamente en alguna de las causas de nulidad de pleno Derecho previstas en el **artículo 47 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.**

A lo largo del presente escrito han quedado acreditadas diversas infracciones legales que no sólo aconsejan, sino que imponen la suspensión del procedimiento de adjudicación.

Pasaremos ahora a examinar en el presente caso los daños a la empresa a la que represento y que se derivan de la ejecución inmediata de la actuación administrativa impugnada, y la inexistencia de perjuicios para el interés público por razón de la suspensión, que llevan a una clara conclusión: La necesidad de que se proceda a la suspensión de la actuación administrativa impugnada.

1.1.- Inexistencia de perjuicios para el interés general derivados de la suspensión del procedimiento de adjudicación. El propio interés general demanda la suspensión.

El propio interés general demanda la suspensión del procedimiento, pues es contraria al interés público la prosecución de un procedimiento que, aquejado de vicios que comprometen indefectiblemente su validez, generará actuaciones y gastos para los potenciales licitadores, con las eventuales reclamaciones a que ello pueda dar lugar con posterioridad.

En el presente supuesto es evidente que la resolución impugnada incurre en manifiestas infracciones de preceptos legales, con las trascendentales consecuencias que además han atribuido a estas infracciones los Tribunales. El carácter manifiesto de estas infracciones no solo ampara, sino que, desde la mera prudencia, recomienda la suspensión del procedimiento de licitación.

E igualmente el interés público demanda la suspensión en cuanto es a la Administración a quien primero interesa que el contrato se configure sobre unas bases que garanticen el mantenimiento del contrato y, con ello, del suministro.

A este respecto no está de más recordar que la jurisprudencia (Sentencias de Tribunal Supremo de 15 de diciembre de 1994, Ar. 9456 y de 13 de enero de 1997, Ar. 127) determina que ha de tenerse en cuenta no “el interés público” como algo abstracto, sino el interés concreto en juego. Lo que implica que este concepto jurídico indeterminado ha de valorarse en cada caso en muy directa relación con el interés público presente en la actuación administrativa. Y en el presente caso, el indudable interés público de una actividad que afecta directamente a la sanidad pública se protege suspendiendo el procedimiento de adjudicación, habida cuenta el

carácter manifiesto de las infracciones legales invocadas por esta parte y habida cuenta los riesgos que entraña la continuación del procedimiento tal como se acaba de exponer.

En cambio, la suspensión del procedimiento de adjudicación no genera perjuicio para el interés general, pues las necesidades de los pacientes han estado hasta hoy perfectamente cubiertas con los contratos vigentes, y podrá seguir estándolo –pues la ley habilita para ello- hasta tanto se adjudique un nuevo expediente de contratación conforme con las exigencias legales.

Por todo ello, se impone la suspensión del expediente de contratación impugnado como una medida cautelar de necesaria adopción en aras a proteger tanto los intereses privados como el propio interés público en conflicto.

1.2.- Los perjuicios derivados para la empresa a la que represento. Apariencia de buen derecho.

Resulta evidente que la adjudicación realizada por el órgano de contratación causa un grave perjuicio a **PRIM, S.A** puesto que es la empresa que ha presentado la oferta económicamente más ventajosa en cumplimiento con las exigencias contenidas en los Pliegos que rigen la convocatoria, siendo esta una exigencia del contrato.

Pero, pese a ello, no ha resultado adjudicataria, siéndolo una empresa que ha sido erróneamente valorada respecto del cumplimiento de las exigencias técnicas obrantes en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

Por ello, resulta evidente que, atendida la inexistencia de perjuicios para el interés general, así como los daños y perjuicios que la actuación administrativa impugnada causa a **PRIM, S.A** y teniendo en cuenta además el carácter manifiesto de las infracciones legales invocadas, se impone la suspensión del procedimiento hasta que se resuelva sobre la adecuación a la legalidad de la convocatoria.

En su virtud, esta parte,

SOLICITA

A este Tribunal que acuerde la suspensión cautelar del procedimiento de licitación del expediente de referencia, hasta la resolución del Recurso Especial interpuesto mediante el presente escrito.

SEGUNDO OTROSÍ DIGO:

Que por medio del presente propongo y desde ahora acepto que cualquier notificación se me pueda verificar por medios electrónicos o telemáticos, y señalo para ello los siguientes datos:

FAX: 913342404

Email: departamento.concursos@prim.es

Teléfonos para confirmación: 913342422

Y que, en todo caso, el domicilio postal a efectos de notificaciones es el que figura en los datos incluidos en el encabezamiento del presente.

Por todo ello, esta parte,

SOLICITA

A ese Tribunal que tenga por realizada la anterior manifestación a efectos de medios de notificación.

Y para que conste a los efectos oportunos, se firma la presente en Móstoles, a 22 de julio de 2019.

Fdo.: Antonio Mendes Castro
Apoderado
PRIM, S.A

DOCUMENTACIÓN ANEXA

- **Documento N° 1:** Copia de escritura de apoderamiento del representante legal.
- **Documento N° 2:** Copia de la Resolución de Adjudicación que constituye el acto impugnado.